



## **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL**

**Medellín, seis (6) de abril de dos mil veintiuno (2021)**

*Proyecto discutido y aprobado en sala virtual*

Demandante: AMPARO DE JESÚS ÁLVAREZ ÁLVAREZ  
Intervinientes: MARÍA ADRIANA RAMÍREZ HERRERA y FABIO ANDRÉS GONZÁLEZ RAMÍREZ  
Demandado: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES  
Radicado: 05001 31 05 009 2015 00563 01  
Decisión: 060

### **DECISIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA**

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en éste acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de los intervinientes ad excludendum, MARÍA ADRIANA RAMÍREZ HERRERA y FABIO ANDRÉS GONZÁLEZ RAMÍREZ, con motivo del auto proferido por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín el día 23 de julio de 2020, mediante el cual se dispuso negar la solicitud de nulidad presentada.

De acuerdo a lo dispuesto en el numeral primero del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 del 4 de junio de 2020, la presente decisión se profiere mediante auto escrito, aprobado previamente por los integrantes de la Sala.

### **A N T E C E D E N T E S:**

En el proceso de la referencia, quien actúa como apoderado de MARÍA ADRIANA RAMÍREZ HERRERA y FABIO ANDRÉS GONZÁLEZ RAMÍREZ, propuso incidente de nulidad invocando las causales tercera, cuarta y octava del artículo 133 del Código General del Proceso, en la medida que: i) pidió aplazamiento de la audiencia que estaba programada para el 16 de septiembre de 2019, no obstante aquella sí se realizó; ii) se genera una indebida representación de las partes ya que no puede actuar en calidad de apoderado de dos partes involucradas en el proceso; y iii) no se practicó en debida forma la notificación a FABIO ANDRÉS, ya que inicialmente fue citado como litis consorcio por pasiva y posteriormente como interviniente ad excludendum, sin haber tenido la oportunidad de presentar demanda en procura de sus derechos.

Luego del trámite respectivo que se le impartió al incidente de nulidad propuesto, tal y como lo establecen los artículos 129 y 134 del Código General del Proceso, el Juez de Primera Instancia, en audiencia del 23 de julio de 2020, dispuso negar la solicitud y condenar en costas al apoderado, fijando como agencias en derecho la suma de un salario mínimo legal mensual vigente.

Inconforme con la decisión, el incidentista interpuso recurso de apelación, indicando que si bien acoge la tesis del despacho respecto a la causal tercera y lo relacionado con la improcedencia de la solicitud de aplazamiento de la audiencia, no comparte la decisión en cuanto a la solicitud de nulidad presentada por las causales cuarta y octava. En ese sentido, sostiene que el señor FABIO ANDRÉS efectivamente tiene un derecho del 50% ya reconocido, pero cuando se notifica por conducta concluyente, hasta esa parte del proceso era un litisconsorcio por pasiva, pero posteriormente se vuelve una parte involucrada con un derecho sustancial, objetivo, real y disputable. Con base en lo anterior, asegura que tendría que haber sido notificado

aparte y darle la oportunidad, con un apoderado distinto, de presentar demanda, ya que él como apoderado de la señora ADRIANA, también solicitó el 100% de la pensión de sobrevivientes, que afecta el 50% de FABIO. En ese hecho se fundamenta la causal cuarta de indebida representación ya que no podía representar a la parte contraria en un juicio, y la octava, porque tal y como lo avizó en el escrito inicial, los citados tendrían que vincularse y tendrían que notificarse por que la ley lo ordenaría así.

Respecto de la condena en costas, habría que replantearlas en el hecho de que se conoce la sanción del artículo 365 del C.G.P., pero ellas también están a discrecionalidad del despacho cuando se observe temeridad y mala fe. En este caso, el incidente de nulidad propuesto está basado en la buena fe con fines de organizar procesalmente las actuaciones y que cada parte pueda tener su representante, sin que como apoderado tenga por qué asumir de su patrimonio el valor de esas costas reconocidas.

### **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**

En el término del traslado para alegar de que trata el artículo 15 del Decreto 806 del 4 de junio de 2020, ninguna de las partes hizo uso de su oportunidad en tal sentido.

### **CONSIDERACIONES:**

A través de la presente acción judicial, se pretende el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes como consecuencia del fallecimiento del señor FABIO DE LA CRUZ GONZÁLEZ CORREA, hecho ocurrido el 28 de febrero de 2013. Pero la cuestión que se plantea para conocimiento de la Sala, tiene que ver con la solicitud que hace el que hasta ahora actúa como apoderado de la señora MARÍA ADRIANA RAMÍREZ HERRERA y de su hijo FABIO ANDRÉS GONZÁLEZ RAMÍREZ, quien presentó incidente de nulidad invocando las causales tercera,

cuarta y octava del artículo 133 del Código General del Proceso, especialmente por el hecho de no haberse practicado en debida forma la notificación a FABIO ANDRÉS al modificarse la calidad en que fue vinculado al proceso, pero además por no haberse practicado en debida forma su notificación.

Antes de cualquier consideración en torno al tema y con el fin de dar mayor claridad a lo ocurrido, es conveniente hacer un recuento de lo que hasta ahora ha acontecido en el proceso y con ello establecer si es factible declarar la nulidad de lo actuado y rehacer las actuaciones desde el auto admisorio de la demanda como se reclama, o si lo adecuado es continuar el proceso en los precisos términos que dispuso el Juez de Primera Instancia.

**i)** La presente demanda fue presentada por la señora AMPARO DE JESÚS ÁLVAREZ DE GONZÁLEZ el 24 de abril de 2015 (fls. 5 y 9);

**ii)** En el auto admisorio de la demanda del 2 de julio de 2015, se dispuso vincular al proceso a la señora MARÍA ADRIANA RAMÍREZ HERRERA como interviniente ad excludendum, así como a su hijo FABIO ANDRÉS GONZÁLEZ RAMÍREZ como Litis consorcio necesario por pasiva, quien para ese entonces era menor de edad y en esa medida se entendió que estaba representado legalmente por su madre, (fls. 57);

**iii)** En los trámites posteriores se intentó la notificación a ambos, pero ante la imposibilidad de lograr ese objetivo se ordenó el emplazamiento y se les designó y nombró curador ad litem, quien alcanzó a contestar la demanda según memorial del 14 de diciembre de 2016, (fls. 111 a 113);

**iv)** En audiencia llevada a cabo el 25 de enero de 2018, se declaró la nulidad de los actos de notificación de la señora MARÍA ADRIANA y de FABIO ANDRÉS por no haberse realizado en debida forma, por lo que,

luego de subsanada la situación, compareció el Dr. MAURICIO MONTOYA ÁLVAREZ en calidad de apoderado de ambos, presentando incluso contestación a la demanda según se aprecia entre folios 131 y 172.

**v)** Por auto del 30 de julio de 2018, el Juzgado de Primera Instancia requirió a la señora MARÍA ADRIANA para que proceda a presentar demanda teniendo en cuenta que la calidad en que fue llamada al proceso fue como interviniente ad excludendum, distinto a lo ocurrido con FABIO ANDRÉS, quien se vinculó como litisconsorcio necesario por pasiva y por tal motivo se dispuso en su caso tener por contestada la demanda, (fls. 175);

**vi)** Dando cumplimiento al requerimiento del despacho, la señora MARÍA ADRIANA RAMÍREZ HERRERA procedió a presentar demanda pretendiendo el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento del señor FABIO DE LA CRUZ GONZÁLEZ CORREA, (fls. 178 a 218), misma que fue admitida por auto del 26 de noviembre de 2018 y contestada a su turno por la demandante principal y por COLPENSIONES, (fls. 225 a 253);

**vii)** Finalmente, en la etapa de saneamiento dentro del trámite de la audiencia del 16 de septiembre de 2019, el Juez señaló que, en adelante, FABIO ANDRÉS GONZÁLEZ RAMÍREZ habrá de tenerse como interviniente ad excludendum y no como litisconsorcio necesario por pasiva, en la medida que si ninguna de las demandantes acredita el derecho que pretende, en su caso la pensión se acrecería a un 100% (fls. 265 a 267).

Toda la discusión parte del contenido de la Resolución GNR 258086 del 15 de octubre de 2015, por medio de la cual la ACP COLPENSIONES dispuso reconocer la pensión de sobrevivientes causada con ocasión del fallecimiento del señor FABIO DE LA CRUZ CORREA PALACIO a partir del 28 de febrero de 2013, en un

porcentaje de 50% a favor de FABIO ANDRÉS GONZÁLEZ RAMÍREZ en calidad de hijo, inicialmente hasta el 1 de septiembre de 2015, o hasta el 1 de septiembre de 2022 siempre y cuando acredite escolaridad. Además, en ese acto administrativo se decidió dejar en suspenso el restante 50% ante la controversia generada por las interesadas, (fls. 29 a 33).

Ya para resolver la cuestión que se plantea, es indispensable recordar, que en sentencias como la 38450 del 22 de agosto de 2012, la SL 16855 del 11 de noviembre de 2015, rad. 43654, o la SL 18102 del 7 de septiembre de 2016, rad. 45585 proferidas por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, se ha advertido que la forma adecuada de vincular a otros interesados en el trámite cuando de pensiones de sobrevivientes se trata, como por ejemplo la cónyuge o compañera permanente, es a través de la figura de intervención excluyente, a menos que previamente se le hubiera reconocido la prestación o que se trate de menores de edad, lo que daría lugar al llamado como litisconsorcio necesario por pasiva. Así por ejemplo explicó la Corte:

*“En efecto, ha sostenido de antaño esta Corporación que cuando está en discusión el derecho a una pensión de sobrevivientes entre la cónyuge y compañera permanente del causante no es necesario y riguroso integrar un litis consorcio, puesto que ni por previsión legal, como tampoco por la naturaleza de la relación jurídico sustancial que da origen al juicio se da la exigencia procesal señalada, ya que esa vinculación no está formada por un conjunto plural de sujetos que no pueda dividirse, sino que por el contrario cada uno de los beneficiarios puede ejercer su acción con prescindencia de los demás.*

*Así las cosas, la manera adecuada en que deben vincularse al proceso, es a través de la figura conocida como intervención ad excludendum, pues, además de que es una forma de intervención principal, cada una de las partes pretende para sí el derecho controvertido (pensión de sobrevivientes), dado que sus intereses se excluyen y demandan para que se resuelva prioritariamente su pretensión.*

Ahora bien, no desconoce la Sala que hay eventualidades excepcionales en que no es posible resolver el pleito sin la necesaria comparecencia de un determinado beneficiario, como por ejemplo: **(i) cuando se trata de un “menor de edad”, dada su condición especial y la naturaleza del derecho, ya que es posible que a éste se le afecte o despoje de su porción pensional, sin que se le hubiere oído ni permitido ejercer su derecho de defensa por no habersele vinculado debidamente al proceso,** o (ii) cuando el derecho pensional, se ha reconocido a la (al) cónyuge supérstite o compañera (o) permanente, previamente a la iniciación del proceso, habida cuenta que no sería razonable ni jurídico que quien fue satisfecho en su pretensión, aunque resuelta sin autoridad para ello, inusitadamente se vea privado del derecho reconocido, sin que se le haya dado la oportunidad de discutir judicialmente su prerrogativa.”

Debe recordarse que la figura del Litis Consorcio Necesario es una forma de intervención procesal regulada en el artículo 83 del Código de procedimiento Civil, hoy artículo 61 del Código General del Proceso, según el cual “Cuando el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposición legal, haya de resolverse de manera uniforme y no sea posible resolver de mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos, la demanda deberá formularse por todas o dirigirse contra todas...”, lo que surge como respuesta a la necesidad de que la cuestión litigiosa haya de resolverse de manera uniforme para todos los litisconsortes, entendiendo que las actuaciones de cada cual favorecerán a los demás, buscando que se reconozca un derecho en todo o en parte, con exclusión de aquel, de tal suerte que para cerrar la relación jurídico procesal se requiere que el juzgador se pronuncie sobre los derechos u obligaciones de cada uno de los anteriores.

Por su parte, el tercero excluyente está regulado como una intervención facultativa de quien aún no tiene un derecho reconocido pero que también lo pretende, para que sea en ese mismo proceso que se defina si resulta procedente o no luego de la disputa respecto al interesado principal. En ese sentido, el artículo 63 del Código

General del Proceso, antes artículo 53 del C.P.C, dispone que *“Quien en proceso declarativo pretenda, en todo o en parte, la cosa o el derecho controvertido, podrá intervenir formulando demanda frente al demandante y demandado, hasta la audiencia inicial, para que en el mismo se le reconozca.”*

Según la decisión del 16 de septiembre de 2019, FABIO ANDRÉS GONZÁLEZ RAMÍREZ, quien desde el auto admisorio de la demanda había sido vinculado como litisconsorcio necesario por pasiva, debía tenerse en lo sucesivo en calidad de interviniente ad excludendum. Y como parte de los argumentos que tuvo en cuenta el Juez para esa decisión, indicó que él no es un demandado que tenga eventualmente la obligación de asumir algún porcentaje de la pensión como si lo hace COLPENSIONES, además de que el 50% que ya le ha sido reconocido, no está en discusión; por el contrario, eventualmente podría llegar a tener derecho al 50% restante.

Sin embargo, con esa decisión se desconocen varias situaciones de vital importancia a la hora de entender la calidad procesal en la que se debe actuar el referido FABIO ANDRÉS.

Lo primero que se debe advertir, es que, según la copia del registro civil de nacimiento, los 18 años de edad los cumplió el 2 de septiembre del año 2015, lo que significa que cuando el causante falleció (28 de febrero de 2013), pero incluso cuando se presentó la demanda (24 de abril de 2015) y cuando fue admitida (2 de julio de 2015), aún era menor de edad, luego el criterio de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia desarrollado en múltiples providencias como las referidas previamente, ha sido que la vinculación debe hacerse como litisconsorcio necesario por pasiva.

Pero, además, si se quisiera dejar de lado ese argumento en el entendido de que en el curso del proceso alcanzó la mayoría de edad, de todas maneras, por la forma como fueron planteadas las



pretensiones de la demanda, especialmente por la señora AMPARO DE JESÚS ÁLVAREZ DE GONZÁLEZ, es posible concluir que sí está en discusión ese 50% que administrativamente le había sido reconocido y en esa medida sus derechos pueden verse directamente afectados.

Nótese como la pretensión primera de la demanda principal se encuentra redactada de forma general respecto al reconocimiento del *“... derecho que le asiste a la señora AMPARO DE JESÚS ÁLVAREZ ÁLVAREZ a disfrutar de la pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento del señor FABIO DE LA CRUZ GONZÁLEZ CORREA...”*, sin que ninguna salvedad se hubiera dejado en el sentido de buscar simplemente el 50% que había quedado en suspenso luego del reconocimiento vía administrativa de la prestación.

Pero más clara resulta la situación cuando se observa el memorial de contestación de la demanda presentada por la señora MARÍA ADRIANA RAMÍREZ HERRERA, en el que expresamente se opone al reconocimiento de la pensión que aquella reclama, indicando en su lugar que *“... a la única que le asiste el derecho **para reclamar el 100% de la pensión** del señor González es su esposa, la señora Amparo de Jesús Álvarez, **es solo ella la que tiene derecho para reclamar la pensión** de sobreviviente y solo a ella se le continúe pagando con los respectivos incrementos anuales establecidos por la ley ...”*.

Cosa contraria ocurre en el caso de la propia señora MARÍA ADRIANA, ya que en su demanda sí se pide expresamente el 50% de la pensión hasta tanto FABIO ANDRÉS cumpla la mayoría de edad o termine sus estudios, momento a partir del cual dice que ese porcentaje se tendría que aumentar a un 100%.

En esas condiciones, para la Sala resulta claro que la vinculación de FABIO ANDRÉS GONZÁLEZ RAMÍREZ dentro del presente proceso, debe mantenerse como litisconsorcio necesario por pasiva como inicialmente había sido dispuesto, lo que si bien deja sin fundamento

las causales de nulidad invocadas, pues la notificación en tal calidad se realizó en debida forma y se ha mantenido una debida representación, por otro lado implica que se configure la causal octava del referido artículo 133 en su parte final cuando se señala que hay lugar a la causal de nulidad, al no haberse citado en debida forma “... al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado”.

Es por lo anterior y en ejercicio del control de legalidad que tiene establecido el artículo 132 del Código General del Proceso<sup>1</sup>, que se dispondrá la nulidad de las actuaciones surtidas a partir de la etapa de saneamiento, inclusive, llevada a cabo en audiencia del 16 de septiembre de 2019, las cuales deberán rehacerse teniendo en consideración la calidad de litisconsorcio necesario por pasiva que ostenta FABIO ANDRÉS GONZÁLEZ RAMÍREZ, lo que implica revocar la decisión de primera instancia, incluyendo la condena en costas impuesta a cargo del apoderado de la interviniente ad excludendum

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

### **RESUELVE:**

**REVOCAR** el auto proferido por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín, el día 23 de julio de 2019. En su lugar, en ejercicio del control de legalidad que tiene establecido el artículo 132 del Código General del Proceso, se decreta la **NULIDAD** de las actuaciones surtidas a partir de la etapa de saneamiento, inclusive, llevada a cabo en audiencia del 16 de septiembre de 2019, las cuales deberán rehacerse teniendo en consideración la calidad de

---

<sup>1</sup> “**ARTÍCULO 132. CONTROL DE LEGALIDAD.** Agotada cada etapa del proceso el juez deberá realizar control de legalidad para corregir o sanear los vicios que configuren nulidades u otras irregularidades del proceso (...)”

litisconsorcio necesario por pasiva que ostenta FABIO ANDRÉS GONZÁLEZ RAMÍREZ.

Sin costas en esta instancia.

Lo resuelto se notifica por ESTADOS en los términos del artículo 295 del Código General del Proceso.

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR  
DE MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados N° 056  
del 7 de abril de 2021

**Consultable aquí:**

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>

**Firmado Por:**

**JOHN JAIRO ACOSTA PEREZ**

**MAGISTRADO**

**MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA**

**JAIME ALBERTO ARISTIZABAL GOMEZ**

**MAGISTRADO**

**MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA**

**FRANCISCO ARANGO TORRES**

**MAGISTRADO**

**MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **656ac8cfe6de6ea9a457e67524fa3c7586a8aab79c520f5e0604a263d95bd127**

Documento generado en 06/04/2021 02:17:50 PM